



Esta semana se cumplen los dos meses y medio de la segunda Junta. La anterior duró otros dos meses y medio. La primera empezó a echar las primeras reformas, siendo la más significativa la nacionalización parcial del comercio exterior; la segunda ha emprendido dos reformas en sí mismas importantes: la Reforma Agraria y la Nacionalización de la Banca privada nacional. Ambas Juntas pueden y deben estimarse como reformistas. Pero los hechos han demostrado que este reformismo ha llegado tarde y que no es aceptado por los grupos populares que más habían luchado no sólo por esas reformas sino por un proyecto de sociedad distinto.

La insuficiencia de las reformas y la no aceptación popular de las mismas vienen probadas por la represión que han traído consigo. Durante los dos primeros meses y medio de la primera Junta el monto de asesinados por parte de la represión anduvo en torno a los trescientos, por más que durante casi un mes se pudo casi detener la represión por los esfuerzos de algunos miembros de la Junta y por más que la actividad de los grupos para-militares fue menor. En cambio durante los dos meses y medio de la segunda Junta hay ya 689 muertos, totalmente comprobados, a los que se pueden añadir más de otros cien casos, todavía no confirmados con absoluta certeza. Lo cual nos indica que en los dos meses y medio de la segunda Junta se ha triplicado el número de víctimas y más que triplicado las acciones represivas. El terror ha invadido grandes zonas del campo y los operativos militares se dan continuamente en la ciudad como en el campo. Su resultado evidente no es una disminución sino un aumento de la violencia.

La izquierda agredida y reprimida responde también con algunos actos de violencia. Frente a las mil víctimas causadas por los Cuerpos de Seguridad en estos dos meses y medio pueden señalarse unas cien causadas fundamentalmente por los grupos guerrilleros. Pero esta segunda violencia es cuantitativa y cualitativamente distinta; se podrá estar en desacuerdo con ella por razones éticas o simplemente por razones políticas; deberá considerarse siempre como un mal, aunque se presente co-



mo un mal inevitable. Todo ello, sin embargo, no obsta para que deba considerarse como una violencia completamente distinta.

En efecto, ~~sin~~ consideramos en conjunto las más de mil trescientas víctimas que ha ocasionado la represión en estos cinco meses que nos separan del 15 de Octubre, podemos apreciar cada vez más claramente un propósito decidido de aniquilar las organizaciones populares. Las víctimas son rara vez de los grupos llamados guerrilleros; son más bien de las organizaciones populares, que llevan su propia protección, pero que casi nunca causan víctimas entre aquellos que les atacan. Las acciones de estos grupos populares tienen su cuota de violencia: tomas de edificios incluso con rehenes, quemas de buses, tomas de tierras, etc. Pero la respuesta no es proporcionada; parecería que no se sabe dar otra respuesta que la de las balas.

¿Qué proyecto general hay tras toda esta masacre?

Algunas autoridades dicen que son resabios de tiempos pasados, que los Cuerpos de Seguridad responden por su cuenta, al verse amenazados y en peligro. El argumento, aunque tiene un fondo de verosimilitud, es en conjunto inválido. Y esto por dos razones: primera, porque en tiempos de Romero y de Molina esos mismos Cuerpos de Seguridad no mataban del mismo modo ni en cantidad ni en crueldad; segunda, porque cinco meses son ya suficientes para que se hubiese visto un mejoramiento; lo que se da es lo contrario: un empeoramiento.

Otras autoridades dicen que hay que conservar el orden, un orden deshecho por unas organizaciones subversivas enloquecidas, que buscan sus propias muertes para poder mantener la agitación. La argumentación tampoco es válida: en primer lugar, porque no hay país civilizado que necesite de tantas muertes para mantener un orden, que sólo es perturbado en acciones esporádicas; y, en segundo lugar, porque en conjunto no se puede atribuir ese propósito suicida a las organizacio-



nes populares, por más que ocasionalmente les falte cálculo de los riesgos ante un enemigo que siempre responde desproporcionadamente. Lo que sucede a veces es que al ver que su vida está en permanente peligro, no les importa tanto arriesgarla.

Otras autoridades dicen que se trata de evitar la guerra civil, que causaría todavía mayores bajas. Indudablemente la guerra civil causaría mayores bajas. Pero no es cierto que la actual política de masacres esté evitando la guerra civil. Estamos ya en una guerra, pero una guerra declarada sólo por una de las partes. Sólo puede esperarse entonces que la otra parte acabe aceptando el hecho consumado y se vea acorralada hasta verse en la necesidad de desatar esa guerra en toda su amplitud.

No queda sino una explicación. Los que hoy están en el poder y los que desde fuera del país los amparan no quieren de ningún modo que prospere un proyecto nacional en el que las organizaciones populares tegan el puesto que les corresponde. Escudados en los fantasmas del comunismo, del castrismo se consideran justificados nacional e internacionalmente para aplastar a las organizaciones populares, aun cuando éstas han demostrado que están dispuestas a emprender un camino de transición suficientemente garantizado, por más que implique cambios sustanciales no sólo en las estructuras sino en la conducción política del país. Ahora bien, se podrá estar en desacuerdo con este proyecto, respaldado hoy por varios cientos de miles gentes del pueblo y por un buen número de profesionales, técnicos e intelectuales. Pero esto no justifica que la respuesta sea la metralla y el asesinato. La respuesta debe ser política como lo anunció el coronel Majano en los días de la primera Junta, como lo insinúa el senador Zorinski en su carta al Presidente Carter pidiéndole que retrase el envío de ayuda militar y como lo afirma el ex-embajador norteamericano en El Salvador Murat W. Williams que se hace eco y aplaude la petición de Monseñor Romero al Presidente Carter. 22-Marzo-80